TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil Familia

Bogotá D.C., cinco de mayo de dos mil veintitrés

Referencia: 25000-22-13-000-2023-00183-00

Se decide el conflicto de competencia que involucra a la Comisaría de Familia y al Juzgado Promiscuo de Familia de Pacho, dentro del trámite de violencia intrafamiliar seguido por Esperanza Casallas Crespo en contra de Ismael Lasso Villalobos.

ANTECEDENTES

1. El expediente informa que la comisaría involucrada impuso en favor de la señora Casallas Crespo una medida de protección definitiva y, por consiguiente, ordenó al señor Lasso Villalobos cesar los actos de agresión denunciados.

Con posterioridad la ciudadana promovió un incidente de incumplimiento de medida de protección advirtiendo que don Ismael continuó ejerciendo violencia, razón por la cual el comisario de Pacho avocó esa incidencia y el 21 de septiembre de 2022 la declaró fundada y de contera -entre otras cosas- impuso sanción de arresto.

Dicho funcionario no tasó los días de prisión, pues consideró que al juzgado de familia le corresponde cuantificarlos, razón por la cual remitió el expediente a esa judicatura con ese fin y, además, para que se surtiere el grado jurisdicción de consulta del precepto 17 de la Ley 294 de 1996.

2. En consecuencia, el dossier arribó al Juzgado Promiscuo de Familia de Pacho, entidad que el 4 de octubre de 2022 devolvió al comisario el diligenciamiento para que complementara la determinación, ello, con fundamento en que *“sería el caso resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la decisión de fecha 21 de septiembre de 2022, proferida por la Comisaria de Familia de Pacho (Cundinamarca). Sin embargo, revisado el expediente, se observa que la autoridad administrativa impuso la sanción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 294 de 1996, reformado por el artículo 4° de la Ley 575 de 2000 y del inciso final, artículo 11, sin fijar el término de arresto que, para el caso particular sería entre 30 y 45 días”*.

3. En efecto, el plenario retornó al comisario, quien se rehusó a cumplir lo dispuesto por el despacho de familia y de contera remitió la causa a esa sede judicial para que gestionara el *“grado jurisdicción de consulta”*; juzgado que el 10 de octubre pasado no aceptó lo dicho por la comisaria y le devolvió por segunda vez el expediente para que complementara su decisión, en el sentido de justipreciar los días de arresto.

4. Con posterioridad, la comisaria de familia con soporte en las razones que trazó en pretérita oportunidad planteó conflicto negativo de competencia, colisión que remitió al Consejo de Estado.

5. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 23 de febrero de 2023 declaró su falta de competencia para zanjar el enfrentamiento de las autoridades y, por consiguiente, envió esa colisión a este tribunal, ya que *“el Juzgado Promiscuo de Familia de Pacho (Cundinamarca) es una autoridad judicial, en ejercicio de actuación jurisdiccional. Mientras que la Comisaría de Familia es una autoridad administrativa que, en los casos de violencia intrafamiliar, ejerce, de forma excepcional, una actuación de carácter jurisdiccional... En consecuencia, la Sala encuentra que no es competente para analizar el presente conflicto de competencias, pues las entidades involucradas ejercen funciones jurisdiccionales”*.

CONSIDERACIONES

A efectos de desatar el enfrentamiento remitido por el Consejo de Estado, bueno es recordar que la competencia en primera instancia de los asuntos de medida de protección que involucren violencia intrafamiliar están en cabeza del *“comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal”*, pues así lo disponen las leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1098 de 2006 y 1257 de 2008.

Comporta relieves que las sanciones que deriven del incumplimiento de las cautelas de resguardo familiar son exclusiva

competencia del funcionario que conoció en primer grado el diligenciamiento, pues así lo informa el artículo 11 de la Ley 575 de 2000, castigos que naturalmente le corresponde justipreciar siguiendo las realidades de la controversia y los designios contemplados en el ordenamiento jurídico.

De otra parte, la segunda instancia del trámite está en cabeza del juzgado de familia, autoridad a quien le atañe verificar en sede de apelación o de consulta las determinaciones de su inferior; de ello da cuenta el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, ya que conceptuó que *“...contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia», y en el siguiente inciso indica que «serán aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto número 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita”.*

En esas condiciones, emerge irrefutable que a los comisarios de familia *prima facie* les concierne desatar en la primera instancia las controversias que involucren medidas de protección, así como las incidencias orientadas a cesar la infracción de esas cautelas, gestión que como es apenas lógico abarca la imposición de los castigos contemplados en la ley, así como su cuantificación de cara a la conducta del infractor, si se tiene que esos particulares guardan

exclusiva correspondencia con el trámite que debe seguirse en la primera instancia.

En cuanto a la órbita del juez de familia, se circunscribe a confrontar el trámite en la segunda instancia, cuando así lo disponga la ley y lo requieran las partes -si es permitido-, gestión que naturalmente se limita a la evaluación de la legalidad de lo resuelto por el inferior de cara a un estudio concienzudo del material suasorio y de las manifestaciones vertidas por los intervinientes.

De donde se sigue que al juzgado de familia no le atañe terminar, complementar o enmendar la gestión jurídica que en primer grado le incumbe cumplir a la comisaría, en la medida en la que al despacho judicial únicamente le concierne cotejar la legalidad -vía apelación o consulta- de lo **previamente concretado** por su inferior.

De lo anterior da cuenta la Sala de Casación Civil al decir:

“...de conformidad con el artículo 4º de la Ley 294 de 1996, modificado por los artículos 1º de la Ley 575 de 2000 y 16 de la Ley 1257 de 2008, es «al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieron los hechos» a quien le corresponde conocer y fallar en primer grado las medidas de protección de medidas de protección por violencia intrafamiliar, y sólo «a falta» de dicho funcionario la competencia la asume, obviamente en primera instancia también, «el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal».

Nótese que para los efectos jurisdiccionales en comento, ambas autoridades en mención son de igual categoría en el municipio, pues la naturaleza

jurídica de la Comisaría de Familia, es la de una dependencia administrativa que hace parte de la Rama Ejecutiva del orden municipal, creada por mandato del Decreto Ley 2739 de 1989 y posteriormente por la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y Adolescencia, y en cuanto al otorgamiento de la función jurisdiccional para remediar los conflictos de violencia intrafamiliar, éste se origina en el artículo 1º de la Ley 575 de 2000, las cuales son de carácter excepcional.

En lo relacionado con las apelaciones de las medidas definitivas de protección, adoptadas por un funcionario administrativo con funciones jurisdiccionales, se acude a las reglas de competencia reguladas en el estatuto adjetivo, en particular al párrafo 3º del su artículo 24, que en lo pertinente sostiene que «se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelada».

Lo anterior con la clara y expresa advertencia que el superior funcional del Juez Municipal para los efectos de la medida de protección por violencia intrafamiliar, es el de la especialidad de familia, como lo consagran sendas disposiciones legales especiales que crearon y reglamentaron dicha figura jurídica (artículos 4º, 11, 14, 17 de la Ley 294 de 1996, entre otros, con las modificaciones contenidas en la Ley 575 de 2000, Decreto 652 de 2001, Leyes 1257 de 2008 y 4799 de 2011), concordantes con las competencias asignadas en el Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006, y en el Código General del Proceso.

5. En suma, con observancia en la normativa especial que regula los conflictos sobre esta clase de medidas de protección, se concluye que la decisión definitiva adoptada por el Comisario de Familia o por el Juez Municipal, según el caso, es susceptible de apelación, mientras que frente a la resolución o providencia que imponga sanciones por desacato, procede el grado jurisdiccional de consulta, y que la autoridad judicial llamada a resolver tanto el recurso como la consulta, es el juez de familia o promiscuo de familia del lugar donde ocurrieron los hechos, en tanto que es el superior funcional de ambos funcionarios municipales...”.

En el caso concreto, el comisario de la municipalidad de Pacho el 21 de septiembre de 2022 declaró incumplida la medida de protección que cobijó a la ciudadana Casallas Crespo, oportunidad en la que sancionó con arrestó al -presunto- infractor de esa salvaguarda, empero, se apartó de cuantificar esa sanción porque, en su criterio, ese tema es de exclusiva competencia del fallador de Pacho.

Ese panorama vislumbra que la comisaria incumplió con el deber que le confió el legislador, en consideración a que no agotó a cabalidad la gestión que en primer grado le corresponde asumir, ya que ese laborío lo desplegó incompleto al no justipreciar los castigos que su dependencia halló necesarios para frenar la -supuesta- violencia doméstica denunciada.

Ese escenario lo detalló el juez de Pacho atendiendo a que se apartó de desatar el grado de consulta sobre la determinación que halló infringida la medida de protección supra, esto, con soporte en que el comisario primigeniamente le correspondía complementar su decisión, en el sentido de ponderar los castigos derivados de aquella contravención; sin embargo, la comisaría fue renuente porque insistió en su proceder y devolvió el dossier varias veces con el pretexto de que se desatara el prenombrado grado jurisdicción de consulta.

Lo hilvanado permite colegir que lo aquí debatido, en estricto sentido, no comprende un conflicto de competencia en donde 2 autoridades se rehúsen a gestionar desde el inicio determinado trámite, pues lo que destella de lo expuesto es que en realidad la problemática circunda en el desacuerdo del comisario de Pacho en cumplir con un mandato claro de su superior, concerniente a complementar su determinación, situación adicional para arribar el diligenciamiento a la comisaria.

Lo decantado también delata que el comisario desatendió el mandato de complementación del juez de familia, ordenanza que le resultaba vinculante atendiendo a que ese enjuiciador es su superior en el trámite debatido, a ese respecto es importante memorar que la Sala de Casación Civil, en cuanto a la inconformidad de una autoridad inferior frente a las órdenes emitidas por un estrado superior, ha dicho que *“la historia jurídica ha patentizado desde épocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organización judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarquía tan básico para una recta administración de justicia, pues de lo contrario se llegaría a la anarquía y perdería el concepto de autoridad fijado en la misma ley”*, (CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01), siendo además que desconoció la previsión del inciso 3º del artículo 139 del

cgp, que prevé "...no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales..." .

Por las razones descritas, se procederá conforme con lo anunciado para que la comisaria cumpla con lo que le corresponda, debiéndose advertir que su desatención provocó una dilación injustificada del trámite, impidiendo así la verificación cabal de los - aparentes- hechos de violencia familiar denunciados.

DECISIÓN¹

En mérito de lo expuesto, se resuelve:

Primero. Remitir la actuación a la comisaria de familia involucrada para que desate el asunto puesto a su consideración.

Segundo. Comunicar lo dispuesto al juez de familia y a los intervinientes.

Notifíquese y cúmplase,

¹ Para la resolución de la presente actuación se conformó el respectivo expediente de manera virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha actuación podrá ser consultada a través del link: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/EqzVpxSoxdNDI62WbnGKMX4B-OghJ7tTqCZ0Xd4hsR_ZyA?e=TfTxbg

Firmado electrónicamente
JAIME LONDOÑO SALAZAR
Magistrado

Firmado Por:
Jaime Londono Salazar
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **364b03941835e115dac5265a4a6ebb4f93af2c3a9ba609567ea78d29527ee89b**

Documento generado en 05/05/2023 06:50:29 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>